

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, los diputados que suscriben formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Desde el pasado 10 de enero, 24 cooperantes humanitarios de la organización no gubernamental Emergency Response Centre International, entre ellos la refugiada siria Sarah Mardini y el buceador alemán Sean Binder, se enfrentan a posibles penas de hasta 25 años de cárcel en Lesbos (Grecia) como consecuencia de su compromiso para salvar la vida de refugiados que naufragaban en el Mediterráneo. La fiscalía griega acusa a los cooperantes de los delitos de tráfico de personas, espionaje y falsificación de documentos. A estos cargos, se suma la investigación que trata de involucrar a Sarah Mardini y Sean Binder en actividades de blanqueo de capitales, facilitar la entrada ilegal a extranjeros al país y pertenencia a una organización criminal.

En los últimos años, cientos de personas como Mardini y Binder se han enfrentado a juicios injustos y a la criminalización por sus labores humanitarias y de defensores de derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en toda Europa.

Organizaciones de derechos humanos, parlamentos y organismos internacionales han denunciado que estas actuaciones judiciales no responden a una persecución del crimen organizado ni de la trata de personas. Se trataría, más bien, de una estrategia de amedrentación contra el activismo humanitario de quienes defienden activamente la vida y los derechos humanos de miles de personas refugiadas que huyen de conflictos armados y persecuciones.

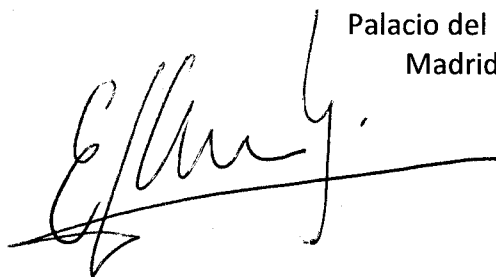
Human Rights Watch (HRW) ha señalado que “este caso criminaliza la solidaridad que busca salvar vidas en el mar, y está lleno de fallos procedimentales que dañan los derechos de los acusados de recibir un juicio justo”. De la misma forma, un informe del propio Parlamento Europeo ha concluido que este juicio es “la criminalización de la solidaridad más grande en Europa”.

¿Qué grado de conocimiento tiene el Gobierno español sobre la situación de los cooperantes acusados de graves delitos por su actividad para salvar la vida de refugiados que naufragaban en el Mediterráneo?

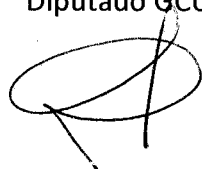
¿Piensa el Gobierno español realizar alguna gestión ante las instituciones europeas para evitar la criminalización del activismo humanitario comprometido con la defensa de los derechos humanos?

¿Qué actuaciones considera el Gobierno español sería necesario promover para preservar la labor que realiza el activismo humanitario en defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en toda Europa?

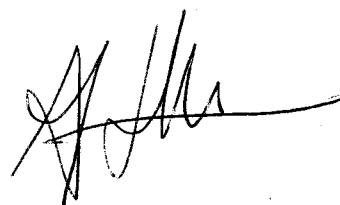
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 19 de enero de 2023



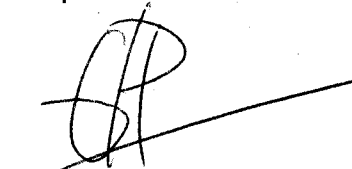
Enrique Santiago Romero
Diputado GCUP-ECP-GEC



Antón Gómez Reino
Diputado GCUP-ECP-GEC



Lucía Muñoz Dalda
Diputada GCUP-ECP-GEC



Gerardo Pisarello Prados
Diputado GCUP-ECP-GEC